

## TEMA 34. ATESTADOS SIN AUTOR CONOCIDO. DILIGENCIA DE INFORME. PROTECCIÓN DE TESTIGOS Y PERITOS. LA DETENCIÓN POR APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 420 DE LA LECRIM. TRASLADO DE DETENIDOS

### 1. ATESTADOS SIN AUTOR CONOCIDO.

La Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley en Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales, ha introducido variadas e importantes novedades en el ámbito del proceso penal y también, en lo que ahora nos interesa, en lo referente a la remisión de los atestados por parte de la policía judicial.

En primer lugar, conviene revisar la nueva redacción del art. 295 de la LEcrim que, en su primer apartado, señala:

“En ningún caso los funcionarios de Policía Judicial podrán dejar transcurrir más de veinticuatro horas sin dar conocimiento a la autoridad judicial o al Ministerio Fiscal de las diligencias que hubieran practicado, salvo en los supuestos de fuerza mayor y en el previsto en el apartado 2 del artículo 284”

Vemos entonces como a la regla general que venía consagrando el precepto de referencia (la remisión de las diligencias practicadas al Juez o Fiscal dentro del plazo de 24 horas), se le añade una excepción que viene determinada por los supuestos de fuerza mayor o la concurrencia de alguno de los supuestos contemplados por el art. 284.2 LEcrim que dispone lo siguiente:

2. No obstante, cuando no exista autor conocido del delito la Policía Judicial conservará el atestado a disposición del Ministerio Fiscal y de la autoridad judicial, sin enviárselo, salvo que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

- a) Que se trate de delitos contra la vida, contra la integridad física, contra la libertad e indemnidad sexuales o de delitos relacionados con la corrupción;
- b) Que se practique cualquier diligencia después de transcurridas setenta y dos horas desde la apertura del atestado y éstas hayan tenido algún resultado; o
- c) Que el Ministerio Fiscal o la autoridad judicial soliciten la remisión.

De conformidad con el derecho reconocido en el artículo 6 de la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima del delito, la Policía Judicial comunicará al denunciante que en caso de no ser identificado el autor en el plazo de setenta y dos horas, las actuaciones no se remitirán a la autoridad judicial”

Así pues, ahora nos encontramos con que, en los casos en los que no exista autor conocido del delito, la policía judicial NO procederá al envío del atestado sino que se limitará a conservarlo a disposición del Ministerio Fiscal y de la Autoridad Judicial excepto en el caso de que se trate de:

- Delitos contra la vida
- Delitos contra la integridad física
- Delitos contra la indemnidad y la libertad sexual
- Delitos relacionados con la corrupción.

Además de lo anterior, esta nueva regla general cederá cuando se practiquen cualesquiera diligencias después de transcurridas setenta y dos horas desde la apertura del atestado y éstas hayan tenido algún resultado o bien cuando la remisión sea solicitud por el ministerio fiscal o la autoridad judicial.

Para finalizar, hemos de hacer referencia al hecho de que, cuando no pueda ser identificado el autor del delito denunciado en el plazo de setenta y dos horas, la policía judicial deberá comunicar tal circunstancia a la víctima emplazándola para que reitere su denuncia ante el Juzgado de Guardia a los efectos de que el atestado pueda ser remitido en los términos del apartado c) del artículo 284.2 de la LEcrim, esto es, a petición del Fiscal o de la Autoridad Judicial.

## 2. DILIGENCIA DE INFORME

Se denomina Diligencia de Informe a aquella diligencia que, en una investigación laboriosa o compleja, complementa el atestado policial, expresando resumidamente el contenido de la misma, los resultados obtenidos, así como cuantos datos se estimen convenientes para facilitar el conocimiento global de la investigación realizada.

Objeto.

Poner de manifiesto en el atestado los hechos claves de la investigación y el juicio lógico de inferencia, seguido por la Policía Judicial para deducir imputaciones.

Requisitos.

a. Se procurará efectuar una detallada y minuciosa descripción fáctica que evidencie la realidad y el "iter criminis", evitando calificaciones jurídicas formales. b. Se omitirá, dentro de lo posible, las impresiones y apreciaciones subjetivas o de ineficacia esclarecedora. Cuando sea inevitable expresar el parecer del instructor, se reseñará la base fáctica de esa opinión. c. No se deberán especificar cuestiones irrelevantes para el proceso penal. d. Se harán constar aquellos indicios o hechos acreditados que puedan servir para enervar la presunción de inocencia de los imputados o desvirtuar sospechas. Asimismo, se harán constar los razonamientos que permitan mantener la incriminación.

Legalidad de la actuación.

Artículo 292 de la LECrim, artículo 11.1. g) de la L.O. 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y RD 769/1987, de 19 de junio, regulador de la Policía Judicial.

Práctica de la actuación.

Extremar la claridad expositiva, diferenciando en párrafos separados los hechos cometidos y su nexo relevante con los sospechosos.

No olvidar la trascendencia de atribuir a cada suceso su momento cronológico.

Se hará constar la identificación del agente que la confecciona.

En esencia, dicha diligencia deberá contener al menos, en la medida de lo posible, los siguientes extremos:

- ☐ Origen de las investigaciones.
- ☐ Indagaciones policiales de carácter pre procesal y aquellas realizadas por orden judicial.
- ☐ En los medios de prueba, diferenciar claramente aquellos que son de constatación objetiva (instrumentos, pericias, etc.) y subjetiva (declaraciones).
- ☐ Concretar imputaciones e individualizar las presuntas responsabilidades de las personas implicadas.
- ☐ Próximas diligencias a realizar y conclusiones.

### 3. PROTECCIÓN DE TESTIGOS Y PERITOS

Es la aplicación de protección a quienes en calidad de testigos intervengan en procesos penales y que la Autoridad Judicial aprecie racionalmente un peligro grave para la persona, libertad o bienes de quien pretenda ampararse en la Ley, su cónyuge o persona a quien se halle ligado por análoga relación de afectividad o sus ascendientes, descendientes o hermanos. (L.O. 19/1994, de 23 de diciembre, de protección a testigos y peritos en causas criminales).

Requisitos.

Con independencia de que la Policía Judicial adopte a priori medidas preventivas de salvaguardia de quien en el futuro pueda ser testigo (arts. 104 CE y 11 de la LO 2/1986 de FCS), la condición formal de testigo protegido precisa de los siguientes requisitos: a) Tener calidad de testigo en un proceso penal. b) Existencia de un peligro grave para la persona, libertad o bienes de quien pretenda ampararse en ella, su cónyuge o persona a quien se halle ligado por análoga relación de afectividad o sus ascendientes, descendientes o hermanos. c) Resolución motivada del Juez Instructor acordando la declaración de testigo protegido y adopción de medidas de protección.

Mediante la Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre, pendiente de desarrollo reglamentario, se da cumplimiento al deber constitucional de colaboración con la justicia, admitido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Cuando el testigo sea menor de edad, el Juez atendiendo a la naturaleza del delito y a las circunstancias de dicho testigo, podrá acordar en resolución motivada y previo informe pericial que se evite la confrontación visual del testigo con el inculpado, utilizando para ello cualquier medio técnico o audiovisual que haga posible la práctica de esta prueba (arts. 448 y 707 de la LECrim).

Práctica de la actuación.

a) No deberá constar en las diligencias que se practiquen su nombre, apellidos, domicilio, lugar de trabajo y profesión, ni cualquier otro dato que sirva para la identificación de los mismos, pudiendo utilizar para ésta un número o cualquier otra clave.

b) Que se utilice cualquier procedimiento que imposibilite la identificación visual normal cuando comparezcan para la práctica de cualquier diligencia.

c) Cuidar de evitar que a los testigos se les hagan fotografías o se tome su imagen por cualquier otro procedimiento, debiéndose proceder a retirar el material fotográfico, cinematográfico, videográfico o de cualquier otro tipo,

a quien contraviniera esta prohibición. Dicho material será devuelto a su titular, una vez comprobado que no existen vestigios de tomas en las que aparezcan los testigos de forma tal que pudieran ser identificados.

d) Podrán ser conducidos a las dependencias judiciales, al lugar donde hubiere de practicarse alguna diligencia o a su domicilio en vehículos oficiales, así como tener custodia policial en los lugares antes citados.

e) Se fijará como domicilio, a efecto de citaciones y notificaciones, la sede del órgano judicial interviniente, el cual las hará llegar reservadamente a su destinatario.

f) Designación de protección policial (Escolta).

g) Le serán facilitados documentos de nueva identidad.

h) Igualmente se le facilitarán medios económicos para cambiar su residencia o lugar de trabajo.

El número, amplitud y detalles de cada medida enunciada la determinará la Autoridad Judicial, al igual que su duración, quien podrá también extender la declaración de testigo protegido a los policías judiciales que hayan investigado como agentes encubiertos (art. 282 bis. 2 de la LECrim).

La Policía Judicial, a través del Ministerio Fiscal, podrá instar el acuerdo judicial de protección para aquellos informadores cuyo testimonio quede comprometido por una amenaza o peligro grave, inferido a través de las investigaciones.

#### 4. LA DETENCION POR APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 420 DE LA LECRIM

Los principios que rigen la valoración de la prueba, en el juicio oral y en la instrucción de las causas penales, exigen que el Juez examine de forma inmediata, con oralidad y contradicción efectiva, los testimonios de quienes han sido víctimas o son testigos de un hecho criminal y, en general, de quienes puedan contribuir a la reconstrucción del hecho que va a ser enjuiciado.

La Ley configura como obligación legal (arts. 118 CE y 410 LECrim) el deber de comparecencia a los llamamientos judiciales. Su incumplimiento impide el ejercicio de la actividad jurisdiccional por lo que es objeto de sanción - caso de la multa a la que se refiere el art. 420 LECrim- o de ilícito penal - art. 463 CP-. Igualmente habilita para la detención y conducción ante el órgano judicial que requiere la presencia del testigo.

##### Casos Regulados.

Las previsiones de la ley procesal en el supuesto de incomparecencias a citaciones ordenadas judicialmente son:

a) El imputado que desoyere la actuación judicial de comparecencia, "si no compareciera ni justificara causa legítima que se lo impida", la orden de comparecencia podrá convertirse en orden de detención (art. 487 LECrim)

Esta detención no es por razón de delito, sino por incumplimiento de una de las finalidades tradicionales de la detención: asegurar la presencia ante el Juez de su persona.

b) El testigo que desoyere la citación judicial de comparecencia. La LeCrim previene que tras una primera citación, si no compareciera sin estar impedido, será sancionado con una multa y será nuevamente citado, con notificación de la multa y advertencia de detención. Si no compareciera a la segunda citación, "será conducido" a la presencia del Juez (art. 420 LECrim).

c) El perito que deje de acudir al llamamiento del Juez o se niegue a prestar el informe. El art. 463 prevé un régimen similar al del art. 420 de la ley procesal penal.

##### Naturaleza jurídica de la "conducción".

Esta "conducción" supone una privación de libertad y es, por lo tanto, una detención. La ley prevé que si una persona citada, que no comparece, si es nuevamente citada y desoye nuevamente el mandato de comparecencia, puede ser privada de libertad y conducida ante el Juez o Tribunal que la reclama para colaborar con la Justicia. Esa privación de libertad, aunque sirve para colaborar con su testimonio a la investigación o enjuiciamiento, es una detención. La doctrina del Tribunal Constitucional (S/98/86, de 10 de

julio) denomina detención a "cualquier situación en la que la persona se vea impedida u obstaculizada para autodeterminar por su propia voluntad una conducta lícita..."

El artículo 17.1 de nuestra Constitución proclama como derecho fundamental que, "toda persona tiene derecho a la libertad y la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley".

La Ley de Enjuiciamiento Criminal, regula de forma extensa el régimen de la detención por razón de delito (art. 520 y concordantes), pero ello no quiere decir que en ella se agoten los supuestos de detención. Hay otros supuestos que se enmarcan en el término "casos" del artículo 17 CE y autorizan privaciones de libertad; sin afán enumerativo son de destacar los dispuestos en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, Ley 4/1985, de 21 de marzo, de Extradición Pasiva, internamiento de enajenados, menores y entre ellas, las detenciones acordadas por el Juez ante la incomparecencia en razón de las citaciones judiciales.

Requisito excluyente: No debe tratarse de las personas que están exentas de concurrir al llamamiento del Juez, comprendidas en los artículos 411 y 412 de la ley procesal.

Forma de practicar la detención.

Como la ley no establece ninguna fórmula especial para llevar a cabo esta detención en el ejercicio de la "policía de estrados", deberán tenerse en cuenta los criterios básicos procesales. Es decir, deberá atenderse a la finalidad de la misma que no es otra que cumplimentar la comparecencia ante el Juez para la práctica de una diligencia previamente acordada, y que la privación de libertad deberá tener en cuenta la forma que menos perjudique al requerido a comparecer. Por lo que se prestará atención especialmente a:

a) Competencia para dictar la orden de detención. Partirá del Juez o Tribunal que la hubiera acordado en el correspondiente procedimiento judicial que se siga contra aquél.

Deberá ser acordada mediante resolución motivada, al afectar a un derecho fundamental, y deberá contener los datos precisos que permitan su ejecución con identificación de la persona contra la que se decreta; su domicilio, la identificación de la causa, el motivo de la comparecencia, el día y la hora en que se requiere la presencia y el antecedente que refiera las incomparecencias anteriores.



De no observarse lo anterior, sería incompleta y no podría ejecutarse la orden de detención

b) El plazo de la detención. El estrictamente necesario para la realización de la conducción, pues así lo previene el artículo 17.2 CE. Supone el traslado de una persona desde su domicilio o lugar de detención al Juzgado o Tribunal que ordenó la detención sin pasar por ninguna otra dependencia policial.

c) Notificación de la resolución judicial. Al tiempo de la ejecución de la detención deberá ser notificada la resolución judicial a fin de que conozca su contenido, finalidad de la misma y derechos que le asisten.

d) Derechos que asisten al detenido, en este caso:

- \* Derecho a que la situación de detención y las causas que la motiva le sean notificadas, posibilitando así la defensa de su derecho si lo considera vulnerado (art. 17.3 CE y 520 LECrim).

- \* Derecho de reparación (art. 121 CE). Al tratarse de una injerencia inmediatamente ejecutiva, la notificación permitirá que actúe su derecho a la reparación si en su práctica se vulnerase algún derecho.

- \* Igualmente que en otra detención del artículo 520 LECrim, el apartado 2.

e) previene el derecho del detenido a que se ponga en conocimiento de un familiar o persona que desee el hecho de la detención.

## 5. TRASLADO DE DETENIDOS

El traslado de detenidos consiste en su conducción o transporte con las debidas condiciones de seguridad para garantizar su integridad física y evitar posibles fugas, desde el lugar en que se ha practicado la detención o se encuentran detenidos, hasta una dependencia policial, sede judicial, centro penitenciario o cualquier otro lugar que disponga la Autoridad competente. El traslado de las personas detenidas constituyen actuaciones policiales que por su especial relevancia para la seguridad de los agentes intervinientes y de la persona detenida deben realizarse según procedimientos establecidos por las Policías en esta materia.

En este sentido la Policía Foral, dispone de un proceso normalizado de trabajo en el que se dispone de manera detallada todas las circunstancias específicas de la actuación.

En todo caso, deben tenerse en cuenta las siguientes directrices con carácter general:

1.-Los traslados se realizarán proporcionando al detenido un trato digno y respetuoso con los derechos fundamentales que sea compatible con las incomodidades que pueda requerir la seguridad de la conducción.

Se utilizarán los medios materiales y humanos que aconsejen las circunstancias en cada supuesto, teniendo en cuenta la peligrosidad del detenido, los hechos que se le imputan, la duración del recorrido y cualquier otra circunstancia que pudiera concurrir.

2. El detenido antes de realizar cualquier traslado será cacheado convenientemente. Previamente al traslado se planificará la realización del mismo de acuerdo a las características particulares de cada caso y atendiendo a los siguientes factores:

- Peligrosidad del individuo/os.
- Número de personas a trasladar.
- Entorno y afluencia de personas.
- Distancia y circunstancias del desplazamiento.
- Tipo de vehículo policial disponible.
- Número de agentes disponibles para el traslado y patrullas de apoyo.

A través del Centro de Mando y Coordinación se comunicarán los horarios previstos (salida - llegada), itinerarios elegidos y demás detalles de importancia.

Finalizado el traslado y una vez en dependencias policiales, se deberá cachear de nuevo al individuo, así como inspeccionar nuevamente el vehículo o local donde hubiera permanecido, con el fin de comprobar que no se haya desprendido de algún elemento durante el traslado o estancia en un local.

El traslado, como fase crítica de la detención estará sometido a una especial vigilancia y atención, controlando exhaustivamente el comportamiento del detenido, garantizando que éste se pueda fugar o se pueda autolesionar.

En caso de fuga de un detenido, se procederá a comunicar al Centro de Mando y Coordinación por el medio más rápido dicha circunstancia, aportando a su vez la mayor información posible (identificación del detenido, rasgos fisiológicos y vestuario, lugar, hora, medios empleado, dirección que ha tomado, peligrosidad, etc....), al objeto de activar el dispositivo de captura y evitar riesgos al personal que pudiera verse afectado por dicho incidente.

Se deberá tener una especial cautela con las armas policiales u otros objetos que puedan convertirse en peligrosos, de forma que éstos no estén al alcance del detenido y puedan ser utilizados por este, evitando riesgos innecesarios.

En el supuesto de conducciones a pie, deberán tenerse en cuenta las siguientes premisas:

- Cachear y esposar previamente al detenido.
- Elegir itinerario más corto, seguro y rápido.
- Llevar sujeto del brazo al detenido.
- No acceder a peticiones del detenido, salvo por razones de urgencia.
- Mantener enlace de comunicaciones.
- Evitar que el detenido se desprenda de elementos de interés policial.